

C/HÉCTOR ARMANDO ITURRA OSORIO
CONDUCCIÓN CON PLACA PATENTE OCULTA (ART.192, LETRA e),
LEY DE TRÁNSITO, N°18.290)
RIT 277-2022
RUC 210011005-7

Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, con fecha 23 de noviembre del año en curso, ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, constituido por los **jueces, Sra. Elisabeth Schürmann Martin**, quien presidió, y los Sres. Héctor Plaza Vásquez y José María Toledo Canales, **tuvo lugar audiencia de juicio oral decretada para conocer la acusación deducida por el ministerio público** en contra de **HÉCTOR ARMANDO ITURRA OSORIO** – cédula de identidad 14.146.494-9, nacido el 13 de junio de 1981, 41 años, soltero, carpintero, domiciliado en la comuna de Pudahuel, pasaje Ensueño N° 7347, Villa Juan Guzmán Cruchaga –.

Concurrieron a la audiencia, además del acusado antes individualizado, la Sra. María Alejandra Bravo, fiscal adjunto del ministerio público, y los abogados defensores particulares, Sres. Francisco Javier Galaz Aliaga y Camila Tapia Abril.

SEGUNDO: Acusación. Que, los hechos sometidos a juicio fueron los siguientes:

“El día 31 de enero del año 2021, a las 07:00 horas aproximadamente, en calle Nueva Andrés Bello frente al N°3666 de la comuna de Quinta Normal, el acusado HÉCTOR ARMANDO ITURRA OSORIO, conducía el automóvil marca Chevrolet, modelo Onix, año 2021, color gris, el cual no mantenía a la vista sus placas patentes. Al revisar la porta maleta del vehículo se pudieron apreciar que se mantenían ambas placas patentes únicas delanteras y traseras, correspondiente a la PPU PLDK-84.

El imputado conducía sabiendo que llevaba las PPU ocultas.

Calificación Jurídica, iter criminis y grado de participación: Los hechos descritos precedentemente son constitutivos del delito de **CONDUCCIÓN CON PLACA PATENTE OCULTA, prescrito y sancionado en el artículo 192 letra e) de la Ley 18.290 de Tránsito, ilícito que se encuentra en grado de ejecución CONSUMADO**, y en los que cabe al acusado participación en calidad de autor según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal. Concorre la circunstancia Agravante, la contemplada en el artículo 12 N°15 del Código Penal.

Preceptos legales aplicables: Son aplicables al caso los siguientes preceptos legales: Artículos 1, 3, 5, 7, 12 N°15, 15, 24, 29, 47, 50, 64 y

67 del Código Penal; artículos 45 y siguientes, 259 y siguientes, todos del Código Procesal Penal y artículos 192 letra e) de la Ley 18.290 de Tránsito.

Pena Solicitada:

La pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, suspensión de la licencia de conducir por 5 años, multa de 100 UTM, como autor del delito de conducción de vehículo con placa patente oculta; además de las respectivas accesorias del artículo 29 del Código Penal y se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal”.

TERCERO: Alegatos de apertura. Que, luego de haberse dado lectura de la acusación se ofreció la palabra a los intervinientes, señalando estos:

– ministerio público: Reiteró los hechos de la acusación, añadiendo que la norma aplicable es el artículo 192 letra e) y no el artículo 200, ambos de la Ley 18.290, atendida la especialidad de la primer; y,

– defensa: indicó que el 17 de abril de 2021 se formalizó al acusado por el artículo 192, el cual no contenía la letra e) que se indica en la acusación, la cual describe un tipo penal distinto, lo que constituye un grave error formal, en el cual no repararon ni el tribunal ni los intervinientes. Así, conforme a los principios de coherencia y congruencia, lo que procedía era dictar sobreseimiento definitivo.

Agregó que si, eventualmente se desestimare lo anterior y se recibiere la prueba, la norma aplicable era el artículo 196 B), letra e, de la Ley 18.290, cuya tipicidad exige probar, entre otros elementos, el conocimiento del acusado en orden a que estaba conduciendo un vehículo sin placa patente. Lo anterior, en la medida que una tía, dueña del vehículo, se lo había prestado, ignorando él que el vehículo carecía de las placas patentes antes mencionadas.

CUARTO: Declaración del acusado. Que, previa advertencia de su derecho a guardar silencio, se ofreció la palabra al acusado, manifestando éste que no renunciaba a ese derecho y que por tanto no declararía.

QUINTO: Pruebas. Que, concluidos los alegatos se dio paso a la recepción de las pruebas, siendo estas únicamente las ofrecidas por el ministerio público: declaración de testigos (2) fotografías (4) y documentos (4).

Al efecto, compareció en primer lugar el testigo Nolberto Diego Allende Gálvez, Suboficial de Carabineros, quien declaró que el 31 de enero de 2021, siendo las 7 de la mañana, encontrándose de servicio de patrullaje en compañía del cabo 1º, Miguel Orellana, observaron que en calle Nueva Andrés Bello, frente al 6626, de la comuna de Quinta Normal, transitaba un vehículo marca Chevrolet, modelo Onix, color gris, el cual no exhibía las placas patentes delanteras ni traseras, por lo que se procedió a la fiscalización del móvil, logrando la identificación del conductor, Héctor Armando Iturra Osorio, quien al ser consultado acerca de las placas, respondió que las mantenía en el portamaletas, lo

que resultó ser efectivo, hallando en su interior dos placas patentes, PLDK-84, las cuales se verificó que correspondían al vehículo en cuestión. El conductor les dijo que el automóvil pertenecía a un familiar, Teresa Gallardo Osorio. En cuanto al motivo de la fiscalización el conductor no dio ninguna justificación acerca del porqué no llevaba las placas a la vista. Se le exhibió el N° 1, de los otros medios de prueba, correspondiente a un set de cuatro fotografías, en las cuales el testigo reconoció el vehículo aludido en su declaración (vehículo desde distintos ángulos sin la placa patente, portamaletas abierto y en su interior la placa patente única PLDK 84).

Contrainterrogado por la defensa, el testigo respondió que el imputado no entorpeció el procedimiento ni desoyó las instrucciones que se le impartieron durante el procedimiento.

A continuación, prestó declaración Miguel Ángel Orellana Flores, Cabo 2° de Carabineros, quien relató, en síntesis, lo mismo que acababa de declarar el testigo Allende Gálvez, agregando por su parte que en esa oportunidad se consultó si el vehículo mantenía encargo pendiente, informándoseles que no registraba encargo y que, según los dichos del detenido, el propietario del vehículo era un familiar. Por último, indicó haber realizado un set fotográfico en el lugar de los hechos.

En cuanto a la prueba documental, se hizo lectura resumida de los siguientes documentos: Hoja de Vida del Conductor Héctor Armando Iturra Osorio, emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en la cual aparece que su última licencia de conducir es de fecha 27 de octubre de 2021, la anterior de 18 de octubre de 2021, y previa a esta una de fecha el 7 de septiembre de 2018; Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados correspondiente al vehículo placa patente única (P.P.U.) PLDK-84, el cual aparece inscrito a nombre de Teresa de las Mercedes Osorio Gallardo, y su fecha de adquisición el 8 de diciembre de 2020; oficio emitido por las Autopistas concesionadas, por el cual se informa que el dispositivo “TAG” del vehículo P.P.U. PLDK84 fue entregado para dicho vehículo en el mes de marzo del año 2021; correo electrónico del Servicio de Registro Civil e Identificación mediante el cual informa que las latas de la P.P.U. PLDK84 fueron entregadas el 15 de diciembre de 2020.

SEXTO: Declaración del acusado. Que, concluida la prueba el acusado solicitó declarar, siendo su declaración la siguiente: que el vehículo se lo había facilitado su tía para hacer un trámite, se dirigía a su casa cuando los carabineros lo fiscalizaron, para lo cual les entregó la documentación del vehículo, ignorando hasta ese momento que el vehículo no tenía las placas patentes ni tampoco que estas se encontraban dentro del maletero del móvil.

Interrogado sólo por su defensa, respondió que la tía se llamaba Teresa de las Mercedes Osorio Gallardo, que el vehículo se lo había prestado *ese mismo día, en la nochecita, en la mañana, ya estaba oscuro*, y que se subió al vehículo y lo echó a andar.

SÉPTIMO: Alegatos de clausura y réplica. Que, concluida la prueba se dio paso a los alegatos de cierre:

a) ministerio público: Indicó que con sus medios de prueba se había acreditado los hechos de la acusación, precisando que fue el imputado quien les dijo a los funcionarios policiales que las placas se encontraban en el maletero del vehículo. Sin perjuicio de lo anterior, la prueba indiciaria demostraba lo contrario. Agregó que todo conductor es responsable de tener que verificar que el vehículo que se encuentra en condiciones de circular; y,

b) la defensa: Refutó el mérito de la prueba de cargo en orden a que el acusado hubiera sabido que el vehículo no contaba con sus placas, refiriendo que las declaraciones de los testigos no fueron contestes, debido a que el primero de ellos refirió que el acusado fue quien dijo dónde se encontraban las placas, en tanto que el segundo deponente declaró que las placas fueron encontradas como resultado del registro del vehículo. Refirió que las máximas de la experiencia y los principios de la lógica demuestran que los conductores no se preocupan de verificar las condiciones del vehículo, ni tampoco si éste cuenta o no con las placas.

En relación con el grave error a que aludió en el alegato de apertura, indicó que este se configuraba en la medida que los hechos de la acusación deben guardar concordancia con las normas legales que se invocan para el tipo penal.

Concluyó su alegato diciendo que lo que correspondía era dictar sobreseimiento definitivo, o en su defecto absolver al acusado por falta de prueba.

c) Réplica de la fiscalía: Indicó que la lógica y las máximas de la experiencia decían relación y arrojaban una conclusión contraria a la señalada por la defensa; y,

d) Réplica de la defensa: Argumentó que, si bien la Ley de Tránsito ha sufrido varias modificaciones, era del caso señalar que en lo concerniente al artículo 192 letra e), la modificación de ese artículo dijo relación con el inciso segundo de dicha norma, en el cual no se hacía referencia a la letra e), ni a ninguna otra. En consecuencia, la norma aplicable era el artículo 196 B, letra e), de la Ley 18.290, de manera que constituía un error grave haber citado aquella otra, debiendo por tal motivo dictar sobreseimiento definitivo.

OCTAVO: Palabras finales del acusado. Que, el acusado declinó dirigirse al tribunal antes de que este deliberara.

NOVENO: Deliberación y hecho establecido. Que, tal como se dio a conocer en la oportunidad que ordena el artículo 339 del Código Procesal Penal, el tribunal resolvió **CONDENAR** a **HÉCTOR ARMANDO ITURRA OSORIO como autor** del delito que previene y sanciona el artículo **192, letra e) de la Ley N° 18.290**, teniendo presente para así decidirlo que la prueba de cargo había resultó suficiente para acreditar el hecho punible y su participación culpable relatados en la acusación.

En efecto, la decisión de condena fue el resultado de la convicción que la prueba de cargo formó en el tribunal en orden a demostrar la efectividad de la imputación penal, esto es, que efectivamente *“El día 31*

de enero del año 2021, a las 7:00 horas, aproximadamente, en calle Nueva Andrés Bello, frente al N°3666, de la comuna de Quinta Normal, Héctor Armando Iturra Osorio fue sorprendido conduciendo un automóvil, marca Chevrolet, modelo Onix, año 2021, el cual no mantenía a la vista sus placas patentes. Al registro del vehículo, se halló en el interior del portamaletas dos latas grabadas con las letras y números PLDK-84, las cuales correspondían al vehículo fiscalizado.

DÉCIMO: Que, el registro fotográfico y las declaraciones de los testigos no dejaron dudas de que los hechos precedentes sí acaecieron. Objetivamente, el testimonio de los funcionarios policiales no permitió al tribunal, como tercero imparcial y objetivo, arribar a otra conclusión que la que se viene señalando, en la medida que los dichos de aquellos, además de consistentes, fueron coherentes y congruentes, no hallando el tribunal en sus declaraciones motivo o justificación que le hubiere permitido poner en duda la credibilidad de sus testimonios.

Al efecto, la circunstancia invocada por la defensa para impugnar la falta de congruencia de los testimonios no dio cuenta de ésta, habida cuenta que el principio de congruencia no dice relación con la literalidad de los testimonios sino con la sustancialidad de estos. Así, y contrariamente al fundamento que invocó la defensa, los testimonios de los funcionarios aprehensores coincidieron tanto en lo sustancial como en lo accidental de los hechos. En este sentido, resulta pertinente consignar que en las declaraciones de los testigos no hubo olvidos que requirieran lectura parcial de sus declaraciones anteriores, tampoco contradicciones entre lo atestiguado en el juicio y lo declarado en la investigación, ni tampoco entre sí, como lo demuestra el hecho de que la defensa no recurrió a los consabidos ejercicios del artículo 332, ni a contrastar la declaración de Orellana con los dichos de Allende, ni el punto en cuestión ni en ningún otro.

UNDÉCIMO: Que, cualquiera haya sido el camino que condujo a los testigos hasta las placas patentes (el acusado se lo dijo al testigo Allende, o como consecuencia del registro del vehículo), lo cierto termina siendo que las placas estaban dentro del maletero del vehículo, y no donde debían estar, circunstancias ambas en las que los deponentes estuvieron contestes, y el acusado confeso.

No resulta atendible, por inverosímil, la ignorancia que adujo al acusado respecto de que el vehículo no tenía las placas a la vista, como también en cuanto a que estas se encontraban al interior del maletero. Que el vehículo no haya sido suyo sino de un familiar y que cuando se subió *ese mismo día, en la nochecita, en la mañana, ya estaba oscuro*, constituyen alegaciones que no encuentran otro respaldo que los solos dichos del acusado, en tanto que la ausencia de las placas y su ubicación posterior dentro del maletero, constituyen hechos sobradamente probados, satisfaciéndose de esta manera la exigencia de dolo que contiene el tipo penal. En efecto, no fue sino al acusado a quien sorprendieron conduciendo un vehículo motorizado sin tener este sus placas patentes a la vista, hecho que no pudo haber dejado de conocer ni aún en las confusas y erráticas circunstancias y distintos momentos en que dijo haber abordado el vehículo. En este sentido, la

máxima de la experiencia aludida por la defensa no constituye una verdad general y obvia sino una experiencia y apreciación personal, de cuya generalidad y obviedad el tribunal no está enterado, toda vez que las máximas de la experiencia constituyen un “juicio adquirido por razón de la experiencia general de la vida o de conocimientos técnicos especiales” (De Santo, Víctor, Editorial Universidad, Buenos Aires, pág. 239).

En lo concerniente a los principios de la lógica que avalarían el desconocimiento del acusado, y con ello su inocencia, no fue posible al tribunal hacerse cargo de tal argumento ya que la defensa se refirió a ellos de manera general y vaga sin citar cuál o cuáles de ellos serían los aplicables al caso de marras, y de qué forma tendrían incidencia en la valoración de la prueba.

DUODECIMO: Que, en cuanto el elemento volitivo a que hace referencia el tipo penal del artículo 192, letra e), de la Ley de Tránsito, se lo tuvo por acreditado con los medios de prueba a que se viene haciendo mención, ya sea como prueba directa o indirecta, y en todo caso como prueba indiciaria. En efecto, el solo hecho de conducir un vehículo sin mantener este sus placas patentes a la vista puede, eventualmente, dar lugar a la duda razonable, pero no cuando estas se hayan dentro del vehículo, al interior del portamaletas, logrando de esa forma sustraerse, a lo menos, al control policial. A este respecto resulta pertinente citar la sentencia de 10 de junio de 2012, Rol 1961-11-INA, del Tribunal Constitucional, en la que se hace referencia al bien jurídico tutelado en el artículo 192, señalando que éste se encuentra dado por el cumplimiento o *satisfacción de condiciones y requisitos habilitantes para conducir en las vías públicas,...transitar y movilizarse mediante vehículos motorizados por las vías públicas importa una actividad con riesgos personales y para terceros.*

DECIMOTERCERO: Que, el certificado de inscripción del Registro de Vehículos Motorizados y el correo electrónico, ambos emanados del Servicio de Registro Civil e Identificación, a los que ya antes se hizo mención, demostraron que con anterioridad a la fecha de los hechos se había asignado una placa patente, la PLDK 84, y que las latas correspondientes habían sido entregadas el 15 de diciembre de 2020, de suerte que no existe explicación razonable ni lícita que justifique el hecho de que el vehículo que conducía el acusado no las llevara a la vista.

DECIMOCUARTO: Sobreseimiento definitivo. Rechazo. Que, el fundamento invocado por la defensa para haber impetrado por vía principal el sobreseimiento definitivo, no resulta atendible ni oponible. El grueso o grave error que refirió la defensa no es tal, ya que la norma legal que cita la acusación es la que corresponde aplicar a los hechos de marras. En efecto, examinada la normativa vigente de la época, se observa que el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, vigente al 7 de mayo de 2021, tipificaba la conducta de marras en el artículo 192 letra e), tal como se señala en la acusación.

La deficiente técnica legislativa imperante ha hecho que las sucesivas modificaciones que ha sufrido el texto de la Ley 18.290, sean confusas e ininteligibles al momento de su interpretación y aplicación, al punto que el planteamiento de la defensa resulta atendible, aunque sólo formalmente, toda vez que la existencia del reproche penal de la conducta enjuiciada ya existía a la data de los hechos, situación jurídica que la defensa no sólo no puso en duda, sino que además reconoció en toda medida en su alegato de clausura, en tanto en cuanto solicitó que, de no acceder el tribunal a su petición de sobreseimiento, la valoración de la prueba se hiciese con arreglo al artículo 196 B, letra e), de la citada ley, y no al artículo 192 letra e).

Ahora bien, la exigencia que, en aras del principio de congruencia, hace la defensa en cuanto a la concordancia que deben mantener los hechos de la acusación con las normas legales que le sirven de sustento, no resulta atendible, ni en sede de garantía ni de juicio oral, como quiera que es el tribunal el llamado a aplicar las leyes conforme a derecho, debiendo por ello superar las omisiones y corregir las calificaciones jurídicas en que suelen incurrir los intervinientes, ya sea en la acusación, tratándose del ministerio público y querellantes, o en los argumentos que en el juicio oral oponen las defensas letradas. La congruencia no dice relación con citas legales sino con hechos, primeramente los de la acusación en relación a los de la formalización, y posteriormente los de la sentencia condenatoria en relación a los de la acusación. Será la disconformidad entre unos y otros los que vulneran el debido proceso, toda vez que el acusado no ha podido defenderse de hechos incongruentes. Y por el contrario, la disconformidad de las citas legales no pone en riesgo el principio de congruencia, desde que el acusado siempre ha sabido la acción típica y antijurídica que se le atribuye en los hechos que se desde un inicio le han sido imputados.

Así las cosas, en los hechos sometidos a enjuiciamiento el tribunal no ha constatado error alguno que haya incidido o podido incidir en la sustancialidad de los mismos y, por ende, en el derecho a defensa en clave de congruencia.

DECIMOQUINTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad ajenas a los hechos. Que, en la audiencia que ordena el artículo 343 del Código Procesal Penal, los intervinientes señalaron lo siguiente:

a) ministerio público: solicitó imponer al acusado la pena indicada en el auto de apertura, haciendo además presente que no concurrían circunstancias modificatorias de responsabilidad, para lo cual hizo lectura del extracto de filiación y de antecedentes del enjuiciado, el cual registra las siguientes anotaciones: causa RIT 4596-2012, Juzgado de Garantía de San Antonio, robo con intimidación, sentencia de fecha 29 de diciembre de 2014, condenado a la pena de tres años y un día de presidio, sustituida por la de libertad vigilada intensiva, por el mismo tiempo de la condena, pena cumplida el 26 de enero 2018; causa RIT 1604-2013, Primer Juzgado de Garantía de Santiago, robo con violencia, sentencia de fecha 29 de enero 2015, condenado a la pena de tres años y un día, sustituida por la de libertad vigilada, cumplida el 3 de mayo de 2021.

Asimismo, hizo lectura de la primera de estas sentencias, en la que consta que la fecha del delito fue el 23 de septiembre de 2012, y de un certificado de fecha 9 de enero de 2015, emitido por el Juzgado de Garantía de San Antonio, en el que se certifica que la sentencia dictada en la causa RIT 4596 -2012 se encuentra ejecutoriada.

Refirió la fiscalía que no concurría la circunstancia atenuante 9ª del artículo 11, como quiera que lo relatado por el acusado no constituyó una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

Por último, hizo presente que conforme a la Ley 18.216, art 1º, inciso penúltimo, no resultaban aplicables al sentenciado ninguna de las penas sustitutivas que en ella se contienen, atendida la fecha de cumplimiento de las condenas; y,

b) la defensa: solicitó reconocer la atenuante del artículo 11 N°9, fundándose para ello en el hecho de que el acusado quiso declarar y renunciar a su derecho a guardar silencio. En su declaración, constó que no se opuso al procedimiento policial.

Pidió que la pena fuere sustituida por libertad vigilada intensiva.

En cuanto a la multa solicitó una rebaja prudencial atendida la escasez de recursos del acusado, en atención a que trabajaba como carpintero. Pidió rebajar la multa al mínimo legal.

DECIMOSEXTO: Decisión de circunstancias modificatorias. Que, la declaración del encausado, situándose en el lugar de los hechos y reconociendo su ocurrencia, importa, obviamente, una renuncia al derecho que tenía a guardar silencio, pero de la cual no se colige la colaboración a que se refiere el artículo 11 N° 9 del Código Penal, en la medida que negó haber sabido que el vehículo no llevaba las placas patentes y que estas se encontraban dentro del portamaletas, constituyendo ambas circunstancias el núcleo de la controversia y de la configuración del delito. En efecto, atendida la flagrancia del delito, no es posible considerar como colaboración al esclarecimiento de los hechos, y menos aún una colaboración sustancial, el hecho de haber declarado reconociendo aquello que resultaba indesmentible. Lo anterior, ni aun considerando el añadido de no haberse opuesto al procedimiento policial, sí, la propia defensa letrada puso en duda el derrotero que siguió el hallazgo de las placas. Distintos caminos no pueden constituir a la vez una colaboración al esclarecimiento de los hechos, más aún si uno de ellos constituye una franca negativa de responsabilidad.

DÉCIMOSEPTIMO: Quantum de pena y forma de cumplimiento. Que, la regulación del quantum de la pena que se indicará en lo resolutivo se hizo considerando la participación que en calidad de autor le cupo al acusado en el delito, el hecho de encontrarse este consumado, la normal o regular extensión del mal provocado con el delito y la circunstancia de no concurrir atenuantes ni agravantes de responsabilidad.

En lo que respecta a la forma de cumplimiento, habiendo sido el sentenciado antes condenado por sendos delitos de crimen, o en su defecto, de simple delito, esto último para el caso que se atienda a la pena que en concreto se le impuso y no a la asignada por la ley al

delito, y no habiendo transcurrido desde su cumplimiento diez o cinco años, respectivamente, el sentenciado habrá de cumplir la pena corporal de manera real y efectiva, sin abonos, según se indica en el certificado extendido por el ministro de fe de este tribunal.

Atendidas las consideraciones precedentes y lo dispuesto en los artículos 1°, 11 N° 9, 15 N° 1, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 50 del Código Penal; 45, 47, 295, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 192 letra e) de la Ley N° 18.290; Leyes 18.256, 18.216 y 19.970, **se resuelve:**

1°.- CONDENAR a HÉCTOR ARMANDO ITURRA OSORIO, antes individualizado, **a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO, MULTA DE CINCUENTA (50) UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES**, suspensión de la licencia de conductor por el plazo de cinco (5) años, y a la pena accesorio de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como **AUTOR** del delito que previene y sanciona la letra e) del artículo 192 de la Ley 18.290, conducción con placa patente oculta, cometido en la comuna de Quinta Normal, el día 31 de enero de 2021.

2°.- Por no cumplir el sentenciado con las exigencias que establece la Ley 18.216, para ser, eventualmente, merecedor de una pena sustitutiva de la pena corporal privativa de libertad, deberá cumplir ésta de manera real y efectiva, y computársela desde que se presente o sea habido, sin abonos.

3°.- Habiéndose incoado investigación, deducido acusación y dictado condena por delito al cual la ley asigna pena aflictiva, cúmplase oportunamente con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 18.556, modificado por la ley 20.568, debiendo al efecto oficiarse al Servicio Electoral.

4°.- Se condena en costas al sentenciado, Héctor Armando Iturra Osorio.

Ejecutoriada que se encuentre esta sentencia, envíense copias autorizadas al Juzgado de Garantía correspondiente para la oportuna ejecución de lo resuelto.

Regístrese, y en su oportunidad archívese.

Redactó José María Toledo Canales, Juez Titular.

RIT 277-2022

RUC 210011005-7

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LOS JUECES TITULARES DEL SÉPTIMO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, MARÍA ELISABETH SCHÜRMANN MARTIN, HÉCTOR PLAZA VÁSQUEZ Y JOSÉ MARÍA TOLEDO CANALES, ACTUANDO COMO JUECES SUBROGANTES DEL CUARTO TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO.